



MÁS DEBATES

Al debate del lunes le faltó otro debate. Cinco millones de parados merecían al menos noventa minutos de charla

AL debate de lunes le faltó sobre todo una cosa: otro debate. Uno en el que los candidatos discutiesen sobre asuntos esenciales para la gobernación de un país en situación crítica que se quedaron fuera de la agenda pactada por los gabinetes de campaña. La mayoría de los problemas prioritarios señalados por los ciudadanos en las encuestas —inmigración, seguridad, corrupción, terrorismo, regeneración institucional y política— estuvieron ausentes del temario o fueron despachados de mala manera. Y hubo un vacío clamoroso, salvo una mínima frase final de Rajoy, de la política exterior de una nación que tiene soldados en varias guerras y empresas en la mayoría de los mercados internacionales. Nada de eso cabía en una sesión de hora y media, que debería haber sido dedicada de forma monográfica a la socioeconomía y el empleo para dejar el resto de las cuestiones en un segundo encuentro. Cinco millones de parados merecían al menos noventa minutos de charla.

Los debates electorales son un derecho de los ciudadanos, no una concesión de los partidos, y deben ser regulados de forma estable por la ley o la costumbre democrática. No pueden depender de las conveniencias estratégicas o tácticas del candidato que se siente con ventaja. A este respecto hay que elogiar la buena disposición de Zapatero, que siempre se mostró abierto a discutir al margen de sus intereses de coyuntura. El consumidor ha de conocer el género antes de comprarlo, y escatimarle esa posibilidad equivale a limitar sus derechos legítimos. En España falta aún hábito de transparencia y sobra miedo a la opinión pública. Nuestra dirigencia se considera a sí misma propietaria y administradora del sistema de representación política, y se ha apoderado de decisiones que no le corresponde gestionar. La confrontación de programas y de ideas no constituye un privilegio graciable sino una obligación moral que bien podría alcanzar estatuto jurídico.

En los países a los que nos queremos parecer los debates forman parte de la rutina. Los organizan medios de comunicación públicos o privados, plataformas de sociedad civil, universidades, institutos de opinión, y sus promotores negocian con partidos y candidatos el formato y la temática. Nadie discute la imparcialidad de los moderadores ni pretende esconder los asuntos incómodos. En algunos casos son periodistas quienes formulan las preguntas, y en otros los propios integrantes del público. Y no pasa nada. El líder que aspira a dirigir una sociedad o un Estado no puede temer la defensa abierta de su propio proyecto.

El cara a cara entre Rubalcaba y Rajoy tendría que haber sido como mínimo a doble vuelta. Fue menos estricto que otros anteriores pero resultó incompleto, un poco postizo y bastante rígido. Y sobre todo ninguneó aspectos básicos del futuro colectivo que todos tenemos derecho a conocer. Y algunos, el deber de explicar.